

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Rafael Rodríguez Montaut, en nombre y representación del Colegio Oficial del Ingenieros Agrónomos del Centro, contra la resolución desestimatoria presunta, por silencio administrativo, del recurso de reposición formulado contra las Ordenes de 27 de diciembre de 1983 y 8 de febrero de 1984, debemos confirmar y confirmamos dichas resoluciones administrativas por ser conformes a derecho, sin hacer condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 13 de febrero de 1995.—El Ministro para las Administraciones Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.

5251 *ORDEN de 13 de febrero de 1995 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 1.056/1991, promovido por doña Carmen Cortés Romero.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 8 de junio de 1994, en el recurso contencioso-administrativo número 1.056/1991, en el que son partes, de una, como demandante, doña Carmen Cortés Romero, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas, de fecha 18 de marzo de 1991, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de fecha 14 de enero de 1991 sobre integración en la Escala de Guardas Rurales, a extinguir, del Instituto de Relaciones Agrarias.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos:

Primero.—Que estimando el presente recurso número 1.056/1991, interpuesto por la representación de doña Carmen Cortés Romero, como viuda de don Rafael Gómez Sancho, contra las Resoluciones de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 14 de enero y 18 de marzo de 1991, las anulamos por ser contrarias al ordenamiento jurídico y declaramos el derecho de la recurrente a la integración de su esposo, don Rafael Gómez Sancho, en la Escala, a extinguir, de Guardas Rurales del Instituto de Relaciones Agrarias, debiendo abonarle la Administración las diferencias retributivas entre el 1 de enero de 1978 y el 21 de noviembre de 1979, así como proceder al pago de las diferencias de cotización a la Seguridad Social y a la revisión de las pensiones, primero, de invalidez del causante hasta el 27 de agosto de 1985 y, después, de viudedad de la recurrente, abonándole las diferencias existentes.

Segundo.—No hacemos una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 13 de febrero de 1995.—P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.

5252 *ORDEN de 13 de febrero de 1995 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso contencioso-administrativo 1.317/1990, promovido por doña María Antonia Dols Moreno.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado sentencia, con fecha 20 de octubre de 1994, en el recurso contencioso-administrativo número 1.317/1990, en el que son parte, de una, como demandante, doña María Antonia Dols Moreno, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas, de fecha 7 de mayo de 1990, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 22 de enero de 1990, sobre reintegro de gastos por asistencia sanitaria.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Salvador Roger Amat (hoy su viuda, doña María Antonia Dols Moreno), contra la Resolución de 7 de mayo de 1990, del Ministerio para las Administraciones Públicas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución de 22 de enero de 1990, de MUFACE, sobre solicitud de reintegro de gastos de asistencia sanitaria en entidad ajena a la aseguradora; actos administrativos que se anulan por aparecer contrarios a derecho, declarando procedente el reintegro a la actora de los gastos que le ocasionó su estancia en la Clínica Universitaria de Navarra por valor de 1.726.867 pesetas, condenando a las entidades concertadas, ADESLAS e Igualatorio Médico-Quirúrgico de Castellón, al pago de dicha suma en la cuantía correspondiente a cada una de ellas según su propio contrato de reaseguro. No se hace expresa imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 13 de febrero de 1995.—P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

5253 *ORDEN de 13 de febrero de 1995 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo 935/1992, promovido por doña Dolores Bravo Rosales.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha dictado sentencia, con fecha 21 de noviembre de 1994, en el recurso contencioso-administrativo número 935/1992, en el que son partes, de una, como demandante, doña Dolores Bravo Rosales, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas, de fecha 17 de marzo de 1992, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 6 de septiembre de 1991, sobre beca de residencia.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Leovigildo Rubio Pavés, en la representación acreditada doña Dolores Bravo Rosales, contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas, y por su delegación el Subsecretario,